

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-29469-2017
CARATULADO : VELÁSQUEZ/PARQUE ARAUCO S.A.

Santiago, veintiuno de Septiembre de dos mil veinte
VISTOS.

Comparece don Boris Nelson Lallemand Marchant, abogado, y don David Alexander Salvador Carvajal, abogado, ambos domiciliados en Matías Cousiño N° 150, oficina 625, comuna y ciudad de Santiago, en representación convencional de don Lev Christian Velásquez Estay, empleado, en calle Relgue N° 221, Villa Parque el Sol, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, quien deduce demanda de resolución de contrato de estacionamiento masivo e indemnización de perjuicios, y en subsidio, de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de Parque Arauco S.A., representado legalmente por don Duncan Grob Urzúa, domiciliado para estos efectos en Cerro Colorado 5240 Torre 1 Piso 15, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Demanda de resolución de contrato de estacionamiento masivo e indemnización de perjuicios interpuesta en lo principal de folio 1:

Antecedentes de hecho:

Señalan que con fecha 30 de noviembre de 2016 alrededor de las 11:00 horas, su representado concurrió en su vehículo particular, modelo Kia Sportage, año 2008, color azul, placa patente BRHS-32, a Parque Arauco correspondiente a la sucursal Arauco Maipú, ubicada en Américo Vespucio N° 399 de la comuna de Maipú, dejando su vehículo guardado en los estacionamientos de dicho centro comercial y bajo la custodia y responsabilidad de dicha institución, mientras se dirigía a realizar diversos trámites.

Relatan que como a las 11:54 horas y a las 13:03 horas realizó un pago de cuentas y una compra en la tienda multinacional Ripley. Que una vez finalizados los actos antes mencionados se dirigió al estacionamiento de dicho Mall para retirarse del lugar, sin embargo, su vehículo no se encontraba en el lugar, desconociendo, hasta ese momento, el hecho de haber sido víctima del robo de su automóvil y demás antecedentes relativos al método utilizado por los antisociales para conseguir su cometido.

Indican que su representado denuncia este hecho a la brevedad a los guardias de seguridad, deja una constancia de denuncia escrita al Mall Arauco



Foja: 1

Maipú y procede a efectuar denuncia en el cuartel móvil de Carabineros que se encontraba estacionado en el centro comercial.

Exponen que a los pocos minutos de los hechos el vehículo de su representado es encontrado por la Policía de Investigaciones, quienes dieron aviso inmediatamente a funcionarios de Carabineros de Chile del cuartel móvil donde su representado efectuó la denuncia antes mencionada. Que en dicha oportunidad, los agentes policiales le informaron al demandante que su vehículo había sido sustraído del estacionamiento del Mall por un grupo de antisociales, quienes lo utilizaron para robar un camión que transportaba cigarros, colisionándolo contra este último y dejándolo, a raíz de ello, con daños significativos.

Explican que posteriormente el demandante se dirigió al cuartel de la Policía de Investigaciones correspondiente a Pudahuel ubicado en Federico Errázuriz 921, comuna de Pudahuel, con el fin de reconocer y retirar su vehículo, lo cual realizó previa autorización del fiscal asignado.

Hacen presente que los daños materiales del vehículo, según presupuesto efectuado por la Automotora Grass y Arueste, ascienden a la suma de \$2.137.449. Que el valor por la depreciación del vehículo asciende a la suma de \$400.000.

Afirman que pese a todo lo anteriormente expuesto, Mall Arauco Maipú no asumió su responsabilidad, sufriendo su representado todas las molestias, angustias y gastos. Que, además, se vio perjudicado ante la imposibilidad de servirse de su vehículo durante un extenso lapso de tiempo (desde el día del acaecimiento de los hechos hasta el día en que pudo efectuar a su costa las reparaciones básicas del vehículo que le permiten funcionar).

Antecedentes de derecho de la responsabilidad alegada:

Alegan que en el caso sub júdice ha existido un incumplimiento contractual de obligaciones derivadas del contrato atípico de estacionamiento masivo o público y que al mismo tiempo existiría también infracciones a la Ley de Protección del Consumidor, sin perjuicio, que en este último caso escaparía de lo solicitado en esta demanda.

Sostienen que en el caso sub júdice se ha infringido el deber de cuidado, de seguridad y la obligación de restituir el bien en las mismas condiciones que se encontraba al momento de celebrarse el contrato. Que el caso de autos quedaría comprendido en aquellas situaciones en que, debido a que las medidas de seguridad dispuestas por el cuidador no fueron suficientes, se ha producido precisamente aquello que el usuario había pretendido evitar al celebrar un contrato de estacionamiento, lo que implica un grave incumplimiento de las obligaciones de guardar la cosa y reintegrarla en la misma condición en que le fuera entregada.



Foja: 1

Afirman que al mismo tiempo se vulnera también el derecho a la seguridad del consumidor contenido en el artículo 3° letra d) de la Ley del Consumidor. Que la obligación de indemnización de perjuicios surge en primer lugar; mediante la acción resolutoria tácita por dicho incumplimiento del deudor, en conformidad a lo establecido en el artículo 1489 del Código Civil, y, en segundo lugar, por mención expresa del artículo 3 letra d) de Ley N° 19.496, la cual tiene adicionalmente el efecto de exponer al proveedor de estacionamientos a la aplicación de multas, conforme a lo establecido en los artículos 23 y siguientes del mismo cuerpo legal.

Aducen que el contrato atípico se puede asimilar sus efectos por analogía a un contrato de depósito remunerado, que la ley asimila a su vez al arrendamiento según lo establecido en el artículo 2219 del Código Civil, y por tanto, somete al estándar general de responsabilidad, a saber: culpa leve; lo que estaría conforme a lo establecido en el artículo 1547 del Código Civil al tratarse de aquellos “contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes”. Que la tendencia de nuestra jurisprudencia pareciera prescindir del concepto de culpa, acercándose a una responsabilidad objetiva, en que, si bien se le admite al demandado probar que agotó los medios para evitar el daño causado, se considera que la sola ocurrencia del hecho es prueba suficiente de su falta de diligencia.

Manifiestan que la extensión del deber de reparar comprende: el vehículo, sus accesorios ordinarios y aquellos bienes que, sin ser habituales, el usuario le haya informado de su presencia.

Hacen presente que en el caso subjúdice se debe asimilar el contrato de estacionamiento por analogía al contrato más parecido, cual son, el contrato de depósito remunerado, contrato de arrendamiento de cosas y de servicios y además aplicabilidad de las normas de la Ley de Protección del Consumidor.

Indican que en el caso subjúdice ha existido un incumplimiento de carácter contractual de la demandada, pues el vehículo de su representado fue robado de las dependencias del estacionamiento por antisociales para ser utilizado en un robo de un camión, provocando la colisión y por lo tanto, daños materiales del vehículo. La demandada incumplió a todas luces con su deber de guardar la cosa, de seguridad y la obligación de restituir el bien en las mismas condiciones que se encontraba al momento de celebrarse este contrato.

Reiteran que el daño emergente comprende los daños materiales del vehículo según presupuesto efectuado por la Automotora Grass y Arueste, por la suma de \$2.137.449. Que el valor por la depreciación del vehículo asciende a la suma de \$400.000.

Previas citas legales, solicitan tener por interpuesta demanda de resolución de contrato atípico de estacionamiento masivo con indemnización de perjuicios en



Foja: 1

contra de Parque Arauco S.A., representado legalmente por don Duncan Grob Urzúa, se declare la resolución del contrato de estacionamiento con indemnización de perjuicios, condenando a la demandada a pagar:

1.- La suma de \$2.137.449 por concepto de daño emergente.

2.- La suma \$400.000 por concepto de depreciación del vehículo ya individualizado.

3.- La suma de \$3.000.000 por concepto de daño moral.

Todo con condenación en costas.

Demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta en el primer otrosí de folio 1:

Antecedentes de hecho:

Dan por reproducidos íntegramente aquellos hechos expuestos en la pretensión principal.

Antecedentes de derecho de la responsabilidad alegada:

Cita los artículos 44, 2314, 2329, 2331 del Código Civil.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad aquiliana, indican que los daños materiales y moral, son los mismos señalados en la pretensión principal de esta demanda, por lo tanto, se entienden íntegramente reproducidos. Que la demandada incurrió en un descuido o negligencia, ya que a consecuencia de su actitud pasiva provocó que el vehículo de su representado fuese robado de las dependencias del estacionamiento para luego ser colisionado con otro vehículo en la comisión de un delito. Que la actitud pasiva y negligente de la demandada provocó que el vehículo de su representado sufriera daños considerables y además provocó un daño moral en el demandante, dada la aflicción sufrida por todo lo ocurrido.

Previas citas legales, solicitan tener por interpuesta demanda de acción de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual en contra de Parque Arauco S.A., representado legalmente por don Duncan Grob Urzúa, que se declare la responsabilidad extracontractual de la demandada, y se le condene por concepto de indemnización de perjuicios con las siguientes sumas:

1.- La suma de \$2.137.449 por concepto de daño emergente.

2.- La suma \$400.000 por concepto de depreciación del vehículo ya individualizado.

3.- La suma de \$3.000.000 por concepto de daño moral.

Todo con plena condenación de costas.

A folio 13 y fecha 12 de marzo de 2017, se notificó la demanda de autos y su proveído a la demandada.



Foja: 1

Mediante resolución de folio 18 y fecha 02 de agosto de 2018, rectificada a folio 20, con fecha 24 de agosto de 2018, se resolvió no darle lugar, por extemporánea, a presentación de la demandada de folio 17 (contesta demanda y opone excepción de falta de legitimación pasiva).

A folio 26 y con fecha 09 de octubre de 2018, se llevó a efecto audiencia de conciliación con la comparecencia de los apoderados de ambas partes. Llamadas las partes a conciliación, esta no se produjo.

Mediante resolución de folio 28 y fecha 05 de noviembre de 2018 y, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta habría de recaer, los siguientes:

1° Efectividad que con fecha 30 de noviembre de 2016 el demandante concurrió con su vehículo particular Placa Patente BRHS-32, a Parque Arauco sucursal Arauco Maipú, dejándolo en el estacionamiento del centro comercial, lugar del que fue sustraído mientras realizaba algunas compras en las tiendas de dicho recinto. Posteriormente y luego de las denuncias realizadas a Carabineros, le dan cuenta que el vehículo fue encontrado con serios daños. Hechos y circunstancias.

2° Existencia de un contrato de estacionamiento masivo o público celebrado entre las partes.

3° Efectividad de un perjuicio o daño sufrido por la demandante; monto y naturaleza.

4° Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

Mediante resolución de fecha 21 de enero de 2020 y de folio 70, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Don Boris NelsonALLEMAND Marchant y don David Alexander Salvador Carvajal, en representación convencional de don Lev Christian Velásquez Estay, deducen demanda de resolución de contrato de promesa de compraventa y de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra de Parque Arauco S.A., representado legalmente por don Duncan Grob Urzúa, todos ya individualizados.

Funda su demanda en los antecedentes de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Mediante resolución de folio 18 y fecha 02 de agosto de 2018, rectificada a folio 20, con fecha 24 de agosto de 2018, se resolvió no darle lugar,



Foja: 1

por extemporánea, a presentación de la demandada de folio 17 (contesta demanda y opone excepción de falta de legitimación pasiva).

TERCERO: Por resolución de fecha folio 28 y fecha 05 de noviembre de 2018, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los que han sido reseñados en la expositiva de esta sentencia.

CUARTO: Que, atendida la naturaleza jurídica de la acción incoada en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la demandante probar los fundamentos facticos o presupuestos de la acción incoada.

Que igualmente, no habiendo la demandada contestado la demanda dentro de plazo, operó la institución de la contestación ficta, entendiéndose que controvierte todos los dichos expuestos en la demanda, correspondiendo al demandante acreditar la veracidad de sus alegaciones.

QUINTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante, acompañó los siguientes documentos:

1.- Boleta electrónica N° 77101671 emitida por Ripley tienda Maipú, de fecha 30 de noviembre de 2016, hora 11:54 horas.

2.- Boleta electrónica N° 76236972 emitida por Ripley tienda Maipú, de fecha 30 de noviembre de 2016, hora 13:03 horas.

3.- Presupuesto reparación automotriz emitido por Automotora Grass y Arueste de fecha 18 de enero de 2017.

4.- Declaración policial voluntaria realizada por el demandante ante la PDI Brigada de Investigación Criminal Pudahuel de fecha 30 de noviembre de 2016.

5.- Factura electrónica N° 29239 emitida por Automotora Grass y Arueste de fecha 11 de enero de 2017.

6.- Parte denuncia, realizada por el demandante ante Carabineros de Chile, correspondiente a la Prefectura Santiago Rinconada, 25 Comisaría de Maipú, de fecha 30 de noviembre de 2016, con Acta declaración voluntaria de víctima de fecha 30 de noviembre de 2018, y con Acta de reconocimiento de especies/ declaración jurada bajo apercibimiento del artículo 210 del Código Penal de preexistencia y dominio/ avalúo y devolución de especies de fecha 30 de noviembre de 2016.

7.- Reclamo efectuado por el demandante ante Arauco Maipú de fecha 03 de diciembre de 2016.

8.- Sentencia dictada por el Cuarto Tribunal en Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa RIT N° 106-2018, de fecha 24 de abril de 2018.



Foja: 1

SEXTO: Que, de igual forma, a folio 36, la actora solicitó que la demandada exhibiera los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad que dispone la demandada en los estacionamientos, en el lugar de los hechos alegados, respecto de la fecha 30 de noviembre de 2016, entre un rango de horario de 10:30 a 13:30 horas, bajo los apercibimientos del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil.

Que por resolución de folio 38 y fecha 18 de junio de 19, se dio lugar a la exhibición solicitada.

Que a folio 64, con fecha 20 de agosto de 2019, se llevó a efecto audiencia de exhibición de documentos, oportunidad en que la demandada reiteró su imposibilidad de contar con dichos registros.

SEPTIMO: Que, por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba instrumental:

1.- Contrato de Servicios de Vigilancia, de fecha 1 de julio de 2015, suscrito entre la empresa de seguridad Rivas y Otros Compañía Limitada (Seguryserv) y la sociedad Constructora y Administradora Uno S.A.

2.- Copia legalizada de los documentos “Anexo 5”, “Anexo 6”, “Anexo 7” y “Anexo 9” correspondientes al Contrato de Servicios de Vigilancia suscrito entre la empresa de seguridad Rivas y Otros Compañía Limitada (Seguryserv) y Constructora y Administradora Uno S.A., de fecha 1 de julio de 2015.

3.- Directiva de Funcionamiento para Implementar Servicios de Guardias de Seguridad, elaborada el 25 de junio de 2015.

4.- Resolución N° 151 de 24 de agosto de 2015, emitida por Carabineros de Chile, Prefectura Santiago Rinconada.

5.- Documento titulado “Pauta de Procedimientos MAM”.

6.- Documento titulado “Plan Gestión de la Seguridad MAM”, emitido por Seguryserv y Mall Arauco Maipú.

7.- Documento titulado “Relación Personal Seguryserv” de fecha 22 de agosto de 2016.

8.- Documento titulado “Funciones de Guardia MAM”, elaborado y suscrito por el Supervisor de Seguridad don Luis San Martín Silva.

9.- Copia autorizada de escritura pública de Constitución de la sociedad “Cocentral Compañía de Centros Comerciales S.A.”, de fecha 30 de noviembre de 1979, celebrada ante el Notario Público Titular de la 8° Notaría de Santiago, don Andrés Rubio Flores.

10.- Copia autorizada de escritura pública de Fusión de las sociedades “Compañía de Centros Comerciales Limitada Cocentral” y “Cocentral Compañía de Centros Comerciales S.A.”, de fecha 30 de abril de 1982, celebrada ante el Notario Público Titular de la 8° Notaría de Santiago, don Andrés Rubio Flores.



Foja: 1

11.- Copia autorizada de escritura pública de reducción de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Cocentral Compañía de Centros Comerciales S.A.”, de fecha 1 de junio de 1992, celebrada ante el Notario Público Reemplazante de la 8° Notaría de Santiago, don Martín Vásquez Cordero.

12.- Copia autorizada de escritura pública de reducción de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Constructora y Administradora Uno S.A.”, de fecha 12 de febrero de 2016, celebrada ante la Notario Titular de la 21° Notaría de Santiago, doña Myriam Amigo Arancibia.

13.- Copia digital de Rol Único Tributario perteneciente a Parque Arauco S.A. emitido por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 5 de junio de 2017.

14.- Copia digital de Rol Único Tributario perteneciente a Arauco Malls Chile S.A. emitido por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 13 de julio de 2016.

OCTAVO: Que, adicionalmente la demandada rindió prueba testimonial, en audiencia de fecha 21 de junio de 2019 y folio 51, consistente en la declaración del siguiente testigo debidamente juramentado:

1.- De don Luis San Martín Silva, supervisor de seguridad, domiciliado en Avenida Américo Vespucio N° 399, comuna Maipú, ciudad Santiago.

NOVENO: Que son hechos de la causa por así encontrarse establecidos en el proceso o haber sido acreditados por la prueba rendida por las partes, los siguientes:

1.- Que con fecha 30 de noviembre de 2016, a las 11:54 horas, don Lev Velásquez Estay efectuó una compra por la suma de \$7.990 en Ripley, tienda Maipú, sucursal 88.

2.- Que con fecha 30 de noviembre de 2016, a las 13:03 horas, don Lev Velásquez Estay efectuó una compra por la suma de \$15.980 en Ripley, tienda Maipú, sucursal 88.

3.- Que con fecha 30 de noviembre de 2016, a las 13:15 horas, don Lev Christian Velásquez Estay compareció ante la 15ª Comisaría de Maipú de la Prefectura de Santiago Rinconada de Carabineros de Chile, y efectuó denuncia por el delito de robo de vehículo motorizado en estacionamiento abierto, ubicado en Avenida Américo Vespucio n° 399, comuna de Maipú, respecto del vehículo marca Kia, modelo Sportage, color azul, año 2008, placa patente única BRHS-32, señalando, en su narración de los hechos, que el día 30 de noviembre a las 11:30 horas, dejó el vehículo singularizado en un calzo de los estacionamientos del Mall Arauco Maipú (frente a la tienda Ripley), con la finalidad de realizar trámites personales. Que posteriormente cuando regresó hasta el sector de estacionamientos, se percató que su vehículo no se encontraba en el lugar,



Foja: 1

desconociendo todo tipo de antecedentes y método que utilizaron los antisociales que se lo sustrajeron.

4.- Que con fecha 03 de diciembre del año 2016, don Lev Christian Velásquez Estay efectuó un reclamo/constancia ante Arauco Maipú por daños autos y robo auto, bicicleta, moto, recaídos en vehículo Kia Sportage pro, color azul metálico, placa patente BRHS-32, año 2008, especificando que sufrió un robo con rotura de chapa y alarma, más choque frontal con daños en parachoques, tapabarros, costado, abolladura, no se informa de necesidad de venida administración Mall. Vehículo recuperado en cuartel PDI Pudahuel.

5.- Existencia de causa RUC N° 1601134570-4, RIT N° 106-2018, del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, seguida por el delito de robo con intimidación, receptación y porte de elementos conocidamente utilizados para cometer el delito de robo, en contra de los acusados Brian Darwin Díaz Muñoz, cédula nacional de identidad N° 18.528.871-4; y Felipe Eduardo Sánchez Sanhueza, cédula nacional de identidad N° 18.340.771-6.

En la sentencia definitiva pronunciada en dicha causa con fecha 24 de abril de 2018, se adquirió la convicción, más allá de toda duda razonable, entre otros, que el día 30 de noviembre de 2016, siendo aproximadamente las 12:30 horas, Esteban Augusto Lara Piña conducía un camión de propiedad de empresa BAT CHILE S.A, cuando fue abordado en primeramente por Bryan Darwin Díaz Muñoz, quien portaba una especie de elemento punzante artesanal, parecido a una T con punta, y luego, por Felipe Eduardo Sánchez Sanhueza, quien amenazó a Lara Piña, estando premunido de un fierro tipo diablo, logrando la sustracción de una caja con 28 cartones de cigarrillos avaluados en \$728.315 pesos. Sánchez Sanhueza y Díaz Muñoz, se movilizaban a bordo del automóvil Marca KIA, modelo Sportage, color azul, placa patente única BRHS-32, el cual era conducido por Sánchez Sanhueza estando como copiloto Díaz Muñoz, conociendo los imputados o no pudiendo menos que conocer la procedencia irregular e ilegítima del vehículo motorizado, por cuanto éste había sido sustraído en horas de la mañana del mismo día 30 de Noviembre de 2016 a su propietario Lev Velásquez Estay en un delito de robo de vehículo motorizado perpetrado en la comuna de Maipú; teniendo este vehículo signos evidentes de fuerza en la puerta del conductor y en su chapa de contacto.

Según el relato del Subinspector de la Policía de Investigaciones, don Javier Sebastián Barría Sáez, "En el momento de la intimidación, el vehículo Peugeot activó una alarma sonora de emergencia, siendo escuchada por antisociales quienes concurren al Kia, se sintieron atemorizados; ellos descendieron del vehículo institucional, se identificaron como PDI, los sujetos



Foja: 1

intentaron huir, soltando la caja previamente sustraída, se suben al Kia, intentando huir, en ese momento el vehículo Peugeot logró cerrarle el paso, lo impactaron y al camión, al no poder huir, se bajaron y huyeron”.

Quedó establecido en la sentencia “que el vehículo en que se movilizaban los acusados, Kia Sportage, de color azul, fue sustraído el mismo día desde el Mall Arauco Maipú, el que mantenía daños, en especial, la chapa de la puerta y la chapa de contacto estaban fracturadas”.

En el Informe Pericial Sonido y Audiovisual N° 990, de 25 de mayo de 2017, elaborado por el perito Patricio Morales Mejías, perito audiovisual de la PDI, consta que “Desde el fotograma 23 a la 27, se ve la dinámica que el furgón que sufre el impacto del azul, se ve que regresa el conductor de polera azul, se pone frente a una de las cámaras, se baja y va al furgón.”. También consta que “Se realizan con las 27 fijaciones, los fotogramas, entre el 1 y 16 se ve la dinámica del vehículo azul a las 12:23 que intercepta al furgón blanco, se desplaza y regresa el furgón blanco y es investido por el azul... Desde el fotograma 23 a la 27, se ve la dinámica que el furgón que sufre el impacto del azul...”.

El testigo don Lev Christian Velásquez Estay, señaló “que el día 30 de noviembre de 2016, fue a hacer trámites al Mall Arauco en su vehículo, cuando terminó, fue a los estacionamientos y no estaba su vehículo Kia Sportage color azul, placa patente BR HS 32, lo dejó estacionado a las 11:00 horas y regresó a buscarlo a las 13:00 horas. Trataron de visualizar un guardia, lo llamaron y le contaron, en ese momento pasó un cuartel móvil de carabineros, lo detuvieron y denunciaron el hecho.... Al terminar de hacer la denuncia, uno de los carabineros recibió llamado de la PDI porque habían encontrado el vehículo, fue como a las 13:30 horas; se dirigió cuartel de la PDI de Pudahuel, donde estaba su vehículo con daños en chapa externa de la puerta del conductor, estaba reventada, la chapa interna de contacto también estaba reventada, arrancado el panel de la alarma, destruido el parachoques, daños frontales, tapabarros y daños frontales. No lo ha podido reparar, le hicieron una cotización por \$2.000.000.”.

DECIMO: Que, atendido el mérito de la acción deducida en autos, cabe señalar que de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil, “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. De acuerdo a dicha disposición, el contrato no puede ser invalidado, sino por consentimiento mutuo de las partes o por las causas legales. La expresión invalidado está utilizada en el precepto no por referencia a la nulidad, sino queriendo significar, “dejado sin efecto”. El contrato puede terminar de dos maneras: por su extinción natural, pues se han cumplido todas las obligaciones y ya no da lugar a otra entre las partes, y



Foja: 1

por la llamada disolución, en que el contrato deja de producir sus efectos normales sin que hayan tenido lugar todos ellos. En el primer caso, ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, que normalmente será el pago o cumplimiento, o algunos de los que le equivalen, como dación en pago, compensación, etc... Cuando se habla de disolución, se está refiriendo justamente a los casos en que las obligaciones se extinguen por modos que no equivalen al pago, o sea, ya no se cumplen íntegramente las obligaciones contraídas, o dejan de generarse para el futuro nuevos efectos. Entre los modos de dejar sin efecto un contrato el precepto citado distingue por un lado el consentimiento mutuo, o sea, la voluntad común de las partes, y las causas legales” (René Abeliuk Manasevich, Las Obligaciones, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Quinta Edición Actualizada, año 2011, pág. 176, 177).

Conforme al artículo 1489 del Código Civil, “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”. De modo que, es menester para que ella sea acogida, que se cumplan los requisitos de procedencia de la acción, a saber, a) que se trate de un contrato bilateral, b) que haya incumplimiento imputable de una obligación y, c) que quien la pide, haya cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación. Como señala don Rene Abeliuk, “La condición resolutoria cumplida pone término a las obligaciones del contrato, y en consecuencia a éste, operando con cierto efecto retroactivo. La principal es la condición resolutoria tácita cuanto una de las partes deja de cumplir una obligación en un contrato bilateral. Declarada la resolución, se extinguen las obligaciones de las partes, y el incumpliente debe indemnizar los perjuicios” (René Abeliuk Manasevich, op. cit., pág. 178).

En lo que respecta a la indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, ésta tiene lugar cuando se infringe una obligación preexistente entre las partes, fundamentalmente de origen convencional, y por asimilación, de otras fuentes extracontractuales (René Abeliuk Manasevich, Las Obligaciones, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Quinta Edición, año 2011, pág. 911). También se ha dicho que la “Responsabilidad contractual es la sujeción a la sanción impuesta por un ilícito contractual. Este ilícito es el daño causado a otro por la infracción de una obligación o relación jurídica específica preestablecida, sea que derive ella de un contrato, un cuasicontrato o de una disposición de la ley, como la obligación alimenticia. Su sanción es la de reparar o indemnizar el daño causado por dicha infracción” (Alessandri, Somarriva, Vodanovic, Tratado de Las Obligaciones, Volumen II, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, año 2010, pág. 251).



Foja: 1

Son requisitos copulativos del estatuto de responsabilidad contractual o elementos necesarios para que se genere la obligación de indemnizar perjuicios contemplada en aquél, la capacidad (que se tiene por acreditada en autos, ya que aquella se constituye como la regla general, y no se ha invocado en la especie ninguna causal de incapacidad reconocida por el legislador), el incumplimiento del deudor (derivada de una obligación contractual previa), el perjuicio del acreedor, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, la imputabilidad del deudor (dolo o culpa), la inexistencia de una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor.

Luego, de conformidad al inciso primero del artículo 1556 del Código Civil, “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”. En torno a dicho precepto, la doctrina ha determinado como requisitos de la indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual los siguientes: a) Que entre las partes exista un contrato válido; b) Que el daño sea ocasionado por una de las partes en perjuicio de la otra; c) Que el daño provenga del incumplimiento y no de otra actuación del deudor.

UNDECIMO: Que el artículo 2 de la Ley de Tránsito que define al estacionamiento como “lugar permitido por la autoridad para estacionar”.

Nuestra legislación no otorga una definición de contrato de estacionamiento. El profesor Eduardo Verdugo ha definido al contrato de estacionamiento masivo como aquel que: “...se supone la existencia de un terreno, con accesos controlados, al cual ingresa un vehículo conducido por el usuario, quien paga un precio, que le otorga derecho a estacionar o dejar el vehículo en un lugar disponible” (Verdugo, Ismael. 2008. La relación entre la autonomía privada y los contratos atípicos. Ars Boni et Aequi. N°4). También puede ser conceptualizados como “aquel acuerdo en virtud del cual una persona natural o jurídica, titular de un establecimiento acondicionado para el estacionamiento de vehículos, cede a una tercera persona (propietario o poseedor de un vehículo) el uso de un espacio determinado para estacionamiento” (art 2° numeral 2.1 de la Ley 29.461 que regula el servicio de estacionamiento vehicular, en la Legislación Peruana).

Que el autor don Marcelo Barrientos Zamorano ha concluido que “Como resultado de esta mixtura de reglas de diferentes tipos contractuales y normas de la LPC, surge un contrato en donde se deposita un automóvil en un espacio ajeno, cuyo uso y goce es cedido de manera temporal, obligándose el consumidor que deposita el automóvil, a pagar un precio o simplemente estacionar el automóvil en



Foja: 1

los espacios habilitados, en caso de que el estacionamiento sea gratuito y el proveedor que cede el espacio de estacionamiento, se obliga a la seguridad, vigilancia y custodia del mismo, durante el tiempo en que el auto se mantenga estacionado en sus dependencias" (BARRIENTOS, M. 2010. Jurisprudencia por daños en estacionamiento de vehículos regidos por la "Ley del Consumidor". Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso N° 34. pp.48-49.). Luego, los deberes del proveedor se resumen en seguridad, vigilancia y custodia del vehículo objeto del contrato de estacionamiento.

Que la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcción impone la obligación de cumplir con determinadas condiciones urbanísticas en atención del uso y del desarrollo de actividades del establecimiento, entre ellos, el contar con estacionamientos para el uso del público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.4.1 y siguientes.

Que de acuerdo al artículo 15 A de la Ley 19.496, *"Los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento de acceso al público general, cualquiera sea el medio de pago utilizado, se regirán por las siguientes reglas: ...*

5. Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño en éstos, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los perjuicios causados al consumidor, no obstante la responsabilidad infraccional que corresponda de acuerdo a las reglas generales de esta ley.

Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos con ocasión del servicio no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente."

Que el citado artículo 15A de la Ley 19.496 distingue claramente dos clases de responsabilidades: una infraccional y otra civil. Que la primera es de conocimiento y competencia de los Juzgados de Policía Local, aplicándose al efecto, según el mismo artículo señala, las reglas generales contenidas en la Ley 19.496; mientras que la segunda, al poseer un carácter civil es competencia de los Juzgados Civiles.

DUODECIMO: Que la Ley 20.967, publicada el 17 de noviembre de 2016, incorporó, entre otros, el referido artículo 15A a la Ley N° 19.496.

Luego, resulta claro dividir dos escenarios temporales, respecto de la responsabilidad del proveedor en los contratos de estacionamientos por incumplimiento de la obligación de seguridad: aquella generada antes de la reforma introducida por la Ley 20.967, y aquella generada con posterioridad a la publicación de la Ley 20.967.



Foja: 1

Que antes de la reforma introducida por la Ley 20.967, la responsabilidad de los proveedores de estacionamiento se fundaba y redirigía a las normas del depósito y del contrato de arrendamiento de los artículos 2211 y siguientes, y artículos 1915 siguientes del Código Civil, respectivamente.

Posterior y paulatinamente, se comenzó a reconocer la figura del contrato de estacionamiento como una figura innominada, aplicándose los artículos 3, letras d) y e), y en los artículos 12 y 23 de la Ley N° 19.496, y de forma supletoria, las normas referidas del Código Civil.

Se ha fallado que esta actividad tiene el carácter de civil para la persona que consiente en la celebración del contrato de adhesión, así por ejemplo en “González con Vinci Park Chile S.A.” (2006), y que es aplicable el artículo 2 de la Ley N° 19.496 (Causa Rol 1258-2006, caratulada “González con Vinci Park Chile S.A.”. 2006. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 16 de junio de 2006). En dicha sentencia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago afirmó que “por su naturaleza y especiales características no puede sino comprender el resguardo de tales vehículos frente a posibles acciones dañosas de terceros”; igualmente afirmó *“Que es un hecho notorio que ningún automovilista suscribe un contrato escrito con la concesionaria al utilizar un estacionamiento concesionado, sino que, como se ha anticipado, el contrato se entiende celebrado por el solo hecho de retirar un vale o comprobante de la máquina dispensadora existente en el acceso, cuyo retiro permite el alzamiento de la barrera y el ingreso del vehículo al estacionamiento.”* (Considerando Sexto).

Progresivamente, la jurisprudencia se unificó en el sentido de otorgar una respuesta positiva a la responsabilidad que recaía sobre los proveedores de estacionamiento. Se recogió deberes agravados para el proveedor, debiendo evitar de manera efectiva los daños a los consumidores estableciéndose que la propia ocurrencia del daño es prueba suficiente del incumplimiento, es decir, se tendió a la objetivación de la responsabilidad del proveedor del estacionamiento (otros estimaron que habría una presunción de que los daños han tenido su origen en la culpa del dueño del estacionamiento).

Por otra parte, cabe consignar que la jurisprudencia no hizo diferencias entre estacionamientos gratuitos y estacionamientos pagados, es decir, estableció que los proveedores de estacionamientos de carácter gratuito les cabe tanta responsabilidad como a los de aquellos en que se paga precio o tarifa, ya que el estacionamiento gratuito es parte del servicio final (en este sentido, sentencia definitiva pronunciada en causa Rol 545-2008, caratulada “Erika Verónica Sandoval Lecaros, Servicio Nacional del Consumidor con Supermercado Santa Rosa Limitada”, Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel; sentencia



Foja: 1

definitiva pronunciada en causa caratulada “Vergara Barrera, Erwin J. con Marín, Juan P.”. 2007. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; sentencia definitiva pronunciada en causa 1258-2006, caratulada “González con Vinci Park Chile S.A.”, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; entre otras).

Que la Ilustrísima Corte de Apelaciones señaló al respecto que *“lo cierto es que el carácter gratuito de estos servicios no es efectivo, pues los mismos forman parte de un servicio mayor y que en definitiva su objeto no es sino atraer clientela”* (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, causas roles N°9663-2008; y 1713-2013). Similar opinión sostienen los autores Cabrera y Ojeda, quienes señalan que “a pesar de que en algunos casos en la playa de estacionamientos éste es gratuito, esto no le quita el carácter de comercial” (Cabrera, María Elena y Ojeda, Roberto. 1999. Contrato de garaje. Estacionamiento de vehículo en playa en: López, R. Contratos especiales del siglo XXI. Buenos Aires, Abeledo-Perrot. P. 189-190).

Por su parte, a Ilustrísima la Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo que “ni aún el hecho de no adquirir productos en el respectivo supermercado puede ser causal de exoneración de responsabilidad”, y que, aunque no se concrete el acto de comercio, “este usuario es también consumidor de acuerdo a la solución adoptada en nuestra jurisprudencia que reputa tales, en sentido amplio, incluso a quienes no hubieren concluido la relación de consumo” (Ilustrísima la Corte de Apelaciones de Valdivia. Causa n° 198-2014. Crimen. Sentencia de 4 de noviembre de 2014. Caratulado Barichivich V. Juan con Unimarc. Considerando segundo).

En conclusión, antes de la ley 20.967: se sostuvo que el proveedor era responsable en caso de robo, hurto o daño de automóviles en estacionamientos, aun cuando no existiera una relación de onerosidad entre el proveedor y el consumidor, entre otros, por los siguientes argumentos: i) en estos tipos de casos sí se configura la relación de consumo por ampliación de la interpretación del concepto de consumidor, ii) el estacionamiento es un servicio conexo, y iii) porque existe el deber legal de tener a disposición del público un número determinado de estacionamientos en virtud de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Esta magistrado adhiere, por todas las razones expuestas, a la postura de que aún en los contratos de estacionamientos gratuitos (lo cual, como se vio, no resulta efectivo ya que el costo del estacionamiento es incorporado en el precio final del producto y/o servicio a disposición del consumidor), el proveedor le cabe igual responsabilidad de seguridad y vigilancia.



Foja: 1

DECIMO TERCERO: Que con la publicación de la Ley 20.967, se reconoció expresamente que los proveedores de estacionamiento de acceso al público general serían civilmente responsables de los perjuicios causados al consumidor. El profesor Mauricio Tapia Rodríguez, estimó que la ley de estacionamientos constituyó un retroceso en la responsabilidad civil y protección de los consumidores, por cuanto agregó un elemento normativo que consiste en la idoneidad de las medidas adoptadas, el que debe ser ponderado por los Tribunales. (Tapia Rodríguez, Mauricio: Ley de estacionamientos: Un retroceso en responsabilidad civil y protección de los consumidores. Ponencia realizada en la XV Jornadas de Derecho Civil, realizadas entre el 12 y 14 de octubre de 2017 en la ciudad de Pucoñ, Chile). Luego, según tal postura resultaba insuficiente la sola ocurrencia del hecho dañoso como única prueba del incumplimiento, pudiendo los proveedores eximirse de responsabilidad en el evento de demostrar que adoptaron las medidas de seguridad adecuadas en la prestación del servicio de estacionamiento. Según esta perspectiva, la obligación de seguridad pasó a ser una obligación que se caracteriza por exigir al deudor de la obligación que actúe conforme al estándar de diligencia debida, con indiferencia de si se alcanza o no el resultado esperado (lo cual obliga a los tribunales de justicia a establecer cuál es ese estándar de diligencia que debe asumir el proveedor de estacionamientos para no ser responsable).

Si nos limitáramos a la naturaleza de dichos contratos, cual es bilateral por cuanto existen un beneficio recíproco de las partes (en el contrato de estacionamiento libre de precios o tarifas, la utilidad del proveedor está dada por el lucro que obtiene éste debido a que el costo del servicio está incorporado en el precio final del producto o servicio dispuesto al consumidor), los proveedores deberían responder de culpa leve, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, siendo de su carga demostrar que actuaron conforme al estándar de diligencia exigido en caso de incumplimiento. Sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores, corresponde los Tribunales establecer el estándar de diligencia para esta clase de contratos atípico, el cual, ésta magistrado estima que, dada la particular naturaleza del mismo ha de elevarse a un grado especialmente cualificado, habida consideración, entre otras razones, de que la obligación de seguridad en este tipo de contratos tiene el carácter de principal por cuanto es la seguridad lo que caracteriza al contrato de estacionamientos.

Que por otro lado, ha de consignarse que en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, surgió otra corriente jurisprudencial en cuanto a la responsabilidad admitida para el caso de los estacionamientos gratuitos, la que estimaba que no es posible aplicar la Ley de Protección al Consumidor a



Foja: 1

estacionamientos gratuitos principalmente porque no se cumple con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Protección al Consumidor en el sentido de que el acto no es de carácter mixto, como tampoco se configura la relación de consumo en virtud de las definiciones del artículo 1 de la Ley de Protección al Consumidor sobre consumidor y proveedor, debido a que no habría onerosidad en el acto. Reflejo de ésta postura es el siguiente razonamiento: *“Que Mall Plaza Vespucio S.A. arrienda locales comerciales y mantiene en el lugar un servicio gratuito de estacionamientos para los clientes que acuden al centro comercial a hacer sus compras. Consecuentemente, no se dan las exigencias del artículo 2° de la ley 19.496 para que opere dicha normativa, a saber, no hay un proveedor, no existe un consumidor y, por cierto, el acto jurídico que los vinculo’ no es de carácter mercantil para el proveedor.*

Que la citada ley, en su artículo 1° N° 2, ha definido proveedor como "las personas naturales o jurídicas, de carácter publico o privado, que habitualmente desarrollen actividades de produccion, fabricacion, importacion, construccion, distribucion o comercializacion de bienes o de prestacion de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa", de suerte que si en la especie nada se ha cobrado por el estacionamiento, Mall Plaza Vespucio no tiene, para estos efectos, la calidad de "proveedor". Del mismo modo, el N° 1 del mismo artículo 1° entiende al consumidor como aquella persona natural o jurídica que en virtud de cualquier "acto jurídico oneroso", adquiera, utilice o disfrute como destinatario final bienes o servicios, de modo que si entre el actor y la demandada no ha habido contrato a título oneroso, como efectivamente no lo hubo, pues el estacionamiento es gratuito, mal puede ser el actor un consumidor. Y, finalmente, el hecho de mantener Mall Plaza Vespucio S.A. un estacionamiento gratuito para los clientes del centro comercial no constituye un acto mercantil para esta persona jurídica.” (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 1813-2015. Sentencia de 9 de marzo 2016. En el mismo sentido, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 1273-2016. Sentencia de 7 de noviembre de 2016; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 9049-2016. Sentencia de 16 de diciembre de 2016; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 1544-2016. Sentencia de 5 de enero de 2016; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 1751-2015. Sentencia de 15 de marzo de 2016; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 284-2013. Sentencia de 4 de septiembre de 2013; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 1742-2013. Sentencia de 18 de diciembre de 2013; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 2541-2011. Sentencia de 12 de octubre de 2012).



Foja: 1

DECIMO CUARTO: Que a pesar de que la demandada contestó la demanda, interponiendo excepción de falta de legitimidad pasiva, de forma extemporánea, cabe igualmente pronunciarse respecto de legitimidad, por cuanto constituye un presupuesto de la acción entablada.

Que “para poder figurar y actuar eficazmente como parte, no ya en un proceso cualquiera, sino en uno determinado y específico, no basta con disponer de esta aptitud general de la capacidad o *legitimatío ad processum*, sino que es necesario además poseer una condición más precisa y referida en forma particularizada al proceso individual de que se trate. Tal condición que se denomina *legitimatío ad causam* o legitimación procesal afecta al proceso no en su dimensión común, sino en lo que tiene de individual y determinado. Más correcto es hablar como lo hace Canelutti de legitimación para pretender o resistir la pretensión, o de legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. Pero creemos que lo mejor es mantener la denominación tan conocida y antigua de *legitimatío ad causam* o legitimación en la causa” (Cristian Maturana Miquel, “Disposiciones Comunes A Todo Procedimiento”, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, año 2009, pág. 45).

Luego, la legitimación procesal, *legitimatío ad causam* o legitimación en la causa, puede definirse como “la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz” o como “la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto litigio, y en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso” (Cristian Maturana Miquel, op. cit. Pág. 46).

De este modo, la legitimación en la causa para el demandante o legitimación activa, consiste “en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda” y respecto del demandado o legitimación pasiva, “en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante... Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación sustancial objeto de la demanda; y el demandante la persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona” (Cristian Maturana, op. cit., pág. 46).



Foja: 1

Por consiguiente, carece de legitimación activa o pasiva, quienes intervienen en un proceso sin reunir tales calidades.

DECIMO QUINTO: En este punto habrá de señalarse que el artículo 43 de la ley 19.496, preceptúa que: *“El proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio responderá directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el prestador de los servicios o terceros que resulten responsables”*. Luego, la demandada no podría escudarse en que los estacionamientos son de propiedad y administración exclusiva de una persona jurídica diversa (Arauco Malls Chile S.A., persona jurídica diversa de Parque Arauco S.A.).

Que a mayor abundamiento, pese a que los estacionamientos no pertenezcan, sean explotados económicamente o administrados por la empresa dueña del lugar donde habría ocurrido el robo del vehículo (en el caso sublite Mall Arauco Maipú), dicho lugar se identifica por señales como propio o disponible para sus clientes. De ahí que ante la apariencia de las cosas los consumidores que concurren a dichos establecimientos no pueden saber o conocer la intermediación existente. De esta forma, quien ha de responder frente a un eventual incumplimiento es la persona, natural o jurídica, que actualmente explota el estacionamiento en cualquier calidad que sea: dueño, arrendatario, subarrendatario, concesionario, usufructuario y cualquier otra denominación que reciba.

DECIMO SEXTO: Que, de acuerdo a la prueba rendida por la demandante, se puede establecer que don Lev Christian Velásquez Estay, concurrió el día 30 de noviembre de 2016 entre las 11:00 y 11:30 horas, al Mall Arauco Maipú, ubicado en Avenida Américo Vespucio n° 399, comuna de Maipú, dejando el vehículo que conducía, marca Kia, modelo Sportage, color azul, año 2008, placa patente única BRHS-32, de su propiedad, aparcado en los estacionamientos de dicho centro comercial. Que luego de efectuar dos compras en la tienda Ripley (la primera a las 11:54 horas y la segunda a las 13:03 horas), regresó a retirar su vehículo, momento en el cual se dió cuenta que éste ya no se encontraba en el lugar.

Que, mediante estos hechos, se puede dar por acreditada la existencia de un contrato innominado de estacionamiento entre la demandante y la demandada el cual se entiende celebrado el día 30 de noviembre de 2016, desde el momento en que don Lev Christian Velásquez Estay ingresó con su vehículo marca Kia, modelo Sportage, color azul, año 2008, placa patente única BRHS-32 a los estacionamientos del Mall Arauco Maipú.



Foja: 1

DECIMO SEPTIMO: Que igualmente, de acuerdo a la prueba aportada, se puede establecer que el vehículo otrora singularizado, de propiedad del demandante, luego de sustraído de los estacionamientos de del Mall Arauco Maipú fue utilizado por Brian Darwin Díaz Muñoz y Felipe Eduardo Sánchez Sanhueza, fue utilizado ese mismo día a las 12:30 horas aproximadamente, para consumir un delito de robo con intimidación al sustraer una caja con 28 cartones de cigarrillos de un camión de propiedad de empresa BAT CHILE S.A. conducido por Esteban Augusto Lara Piña. Que, al momento de huir del lugar de los hechos, el delincuente que conducía el vehículo de propiedad del actor, impactó a un vehículo marca Peugeot de color blanco que se encontraba en el lugar y al camión de propiedad de empresa BAT CHILE S.A.

Que de acuerdo a la prueba rendida, adicionalmente, se puede establecer que con ocasión del robo del vehículo de propiedad del actor y de la perpetración del delito de robo con intimidación consumado por el cual fueron condenados Brian Darwin Díaz Muñoz y Felipe Eduardo Sánchez Sanhueza, el vehículo del demandante sufrió daños en la chapa externa de la puerta del conductor, en la chapa interna de contacto, en el panel de la alarma, en el parachoques, en el tapabarros, en los costados, entre otros.

Que, mediante estos hechos enunciados, se puede dar por acreditada la existencia de daños en la propiedad del demandante y de una relación causal entre el robo del vehículo de propiedad del actor desde los estacionamientos de la demandada y los daños sufridos por dicho vehículo.

DECIMO OCTAVO: Luego corresponde analizar si el robo de que fue objeto el vehículo de propiedad del demandante constituye o no un incumplimiento que se le pueda imputar a la demandada, en el marco del contrato innominado de estacionamiento (contrato cuya existencia se comprobó).

Que, si bien la demandada rindió prueba a objeto de acreditar que desplego la suficiente diligencia en orden a cumplir con su deber de vigilancia y seguridad, lo cierto es que, a pesar de todas las medidas adoptadas en los estacionamientos de Mall Arauco Maipú, la demandada no pudo evitar el robo y posterior daño del vehículo. Que, si bien el actor logró a posteriori recuperar su vehículo, éste presento daños que se habrían producido con ocasión del robo del vehículo y su posterior uso para fines delictivos, así, es posible concluir que de no haber ocurrido el robo del vehículo, éste no habría resultado con los daños que se tuvieron por acreditados. En este sentido, habrá de señalarse el cumplimiento de parte del proveedor demandado implica no solo que el vehículo le sea restituido al actor, sino que le sea restituido sin daños; y como no ocurrió de tal forma, la obligación debe serle cumplida por equivalencia en dinero.



Foja: 1

Que, ésta magistrado es de la opinión de que el proveedor incurre en un incumplimiento imputable de su obligación cuando se produce un robo o hurto en los estacionamientos, que no fue detectado por el sistema de seguridad o vigilancia, percatañdose de la situación el mismo consumidor al momento de regresar al lugar donde había estacionado su vehículo. En tal evento, el proveedor no previene, ni reprime los hechos delictivos, y en definitiva no cumple con sus deberes de custodia, seguridad y vigilancia.

Que, si la demandada explota un estacionamiento en el marco de una organización o aprovechamiento de carácter mercantil, debe aumentar las medidas de diligencia ordinarias en la precaución de eventuales daños a sus clientes, que han preferido utilizar los servicios del mismo. Que si bien la demandada implemento medidas de seguridad o vigilancia en los estacionamientos que destino para sus clientes, de todas formas, se produjo el robo y posterior daño de un vehículo desde sus dependencias, pudiendo concluirse que tales medidas fueron deficientes, resultando acreditado, en el caso sublite, el incumplimiento imputable del contrato de estacionamiento por parte del proveedor demandado.

Que, nos encontraríamos ante un escenario distinto si la demandada hubiera logrado entregar indemne el vehículo al consumidor; o si los mecanismos de seguridad hubieran detectado el hecho delictual en curso, frustrándolo y evitando el robo o daño del vehículo; o si la proveedora luego de detectar el hecho delictual, y reaccionando frente a este, nada pudo hacer aún aplicando todas las medidas destinadas a frustrarlo; todos supuestos bajo los cuales se podría estimar que no hay un incumplimiento imputable de la demandada, hechos que no logró acreditar en juicio.

DECIMO NOVENO: Finalmente ha de señalarse que en el caso sublite también se verifica la mora del demandado por cuanto su obligación de custodia, vigilancia y seguridad sólo podía ser prestada o ejecutada dentro de cierto espacio de tiempo, cual es, mientras el vehículo del demandante se encontraba en los estacionamientos de sus dependencias, lo cual no se verificó. Tal hipótesis se ajusta a lo prevenido por el artículo 1551 n° 2 del Código Civil.

Que aún de estimarse como no concurrente el supuesto previsto por la norma citada, lo cierto es que el actor ha demandado la resolución del contrato e indemnización de perjuicios, con lo cual igualmente se configura la hipótesis de mora prevista en el artículo n° 3 del Código Civil.

VIGESIMO: Que acreditados los presupuestos de la demanda incoada a folio 1, no resta sino acogerla, correspondiendo a continuación analizar los daños cuya indemnización se demanda.



Foja: 1

Al respecto cabe señalar que el daño emergente sufrido por el vehículo de propiedad del actor, a consecuencia del robo de que fue objeto el día 30 de noviembre de 2016, ha sido demostrado según se estableció en el considerando décimo séptimo y puede evaluarse en la suma de \$2.137.449, conforme a documento denominado “Presupuesto reparación automotriz emitido por Automotora Grass y Arueste de fecha 18 de enero de 2017”.

Que serán rechazados los conceptos demandados por depreciación del vehículo y daño moral, por cuanto el actor no rindió prueba alguna para acreditar su existencia y extensión.

VIGESIMO PRIMERO: Que, habiéndose accedido a la demanda principal, se omitirá pronunciamiento respecto de la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

Que, de cualquier forma, el llamado cúmulo de responsabilidad o derecho de opción se encontraría impedida, en virtud de la interpretación que debe hacerse del artículo 15 A N° 5 de la Ley 19.496, por cuanto para hacer responsable civilmente al proveedor se requiere la existencia ineludible de un vínculo contractual. Esto emana del tenor literal de la disposición, que emplea la expresión “si con ocasión del servicio”, lo que apunta directamente a un contrato, estableciendo inevitablemente que, para conseguir la responsabilidad civil del proveedor, el incumplimiento debe darse en el contexto de la prestación del servicio. Por lo mismo, se eliminaría la posibilidad de que el daño provenga de la comisión de un delito o cuasidelito civil.

VIGESIMO SEGUNDO: Que la restante prueba no analizada en mayor detalle en nada altera lo concluido previamente.

VIGESIMO TERCERO: Que atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenara en costas a la demandada.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1489, 1545, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1698, 1702, 1706, 1708, 1709, 1915, 2211 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 170, 346, 358, 348 bis, 383, 384, y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 2 y siguientes de la Ley de Tránsito; artículo 2.4.1 y siguientes de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y; artículos 1, 2, 3, 12, 15, 23, 43 y siguientes de la Ley 19.496, se decide que:

I.- **Se acoge** la demanda interpuesta en lo principal de folio 1, sólo en cuanto se resuelve el contrato de estacionamiento celebrado entre las partes el día 30 de noviembre de 2016 y se condena a la demandada al pago de una



C-29469-2017

Foja: 1

indemnización de perjuicios ascendente suma a \$2.137.449, a título de daño emergente.

II.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, dése copia y archívese en su oportunidad.

ROL N° 29.469-2017.

Pronunciada por doña Karina Portugal Cuevas, Juez Suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Septiembre de dos mil veinte**

